

CONFLICTOS ECOTERRITORIALES, MEGAPROYECTOS DE MINERÍA Y CENTRALES HIDROELÉCTRICAS EN LOS ANDES PATAGÓNICOS: **ESCENARIOS Y DESAFÍOS EMERGENTES PARA EL TRABAJO SOCIAL**

Bárbara Jerez Henríquez*

RESUMEN

En este artículo se presentan algunas reflexiones para el Trabajo Social elaboradas a partir de un trabajo de investigación de carácter cualitativo, comprensivo y explicativo que buscó dar cuenta, desde un análisis regional, las características de los más importantes conflictos ecoterritoriales por la instalación de megaproyectos de minería y represas hidroeléctricas en los Andes patagónicos de Argentina y Chile durante los años 2009 y 2010. Se discuten estas nuevas realidades como territorialidades en pugna a consecuencia de los nuevos diseños extractivistas hegemónicos que reconfiguran a la Patagonia como una región estratégica para la extracción de sus bienes comunes naturales. Este trabajo se estructura teóricamente a partir de los aportes de la ecología política y la geografía crítica como campos de investigación que nos permiten abordar la amplia complejidad e interdisciplinariedad que conllevan los conflictos ecoterritoriales frente a megaproyectos extractivistas.

PALABRAS CLAVES

Andes patagónicos, extractivismos, conflictos ecoterritoriales, Trabajo Social, problemáticas sociales.

ABSTRACT

In this article we present reflections for Social Work, which emerge from a comprehensive and explanatory qualitative research project. This project attempts to explain, from the perspective of a regional analysis, the characteristics of the most important Eco territorial conflicts that arise from mining industry megaprojects and hydroelectric dams in the Chilean and Argentinean Patagonian Andes during 2009 and 2010. We explore new realities, such as territorial conflicts surging from the hegemonic extractive processes that reconfigure Patagonia, making it a strategic region for the extraction of common natural goods. This work is theoretically structured on contributions from political ecology and critical geography, which allow us access to the complexity and interdisciplinary relationships between the Eco territorial conflicts and the extractive megaprojects.

**Trabajadora Social Universidad Tecnológica Metropolitana. Magister en Ciencias en Desarrollo Rural, Universidad Autónoma de Chapingo. México. Candidata a doctora en Estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México.
barbarajerezh@gmail.com*

KEYWORDS

Andean Patagonia, extractivism, territorial conflicts, Social Work, social problematics.

NUEVOS ESCENARIOS DE ACCIÓN EN EL QUEHACER DEL TRABAJO SOCIAL

En la fase actual de acumulación del sistema mundo moderno/colonial' (Mignolo, 2007), América Latina cumple un rol fundamental dada su inserción subordinada a la división internacional y territorial del trabajo. Es decir, como una región proveedora de naturaleza y de sus aún extensas reservas y bienes comunes naturales estratégicos (principalmente agua dulce, minerales, hidrocarburos y biodiversidad), que en este contexto se redefinen y mercantilizan como “recursos naturales”. Las constantes crisis económicas que, desde hace más de 20 años se instalan como una tendencia permanente en todo el globo, hacen que el control de estos espacios geográficos resulte clave.

Desde una perspectiva ecopolítica, a estas localidades afectadas e intervenidas se les define como “territorios o zonas de sacrificio”. Lo anterior busca dar cuenta de los grandes daños que los megaproyectos extractivistas dejan en los ecosistemas locales, como por ejemplo, el agotamiento y contaminación de los territorios y sus bienes comunes naturales; el sacrificio de las economías locales por la afectación de sus actividades agropecuarias y ecoturísticas, entre otras. Por otro lado, dichos megaproyectos tienden a profundizar y multiplicar las problemáticas sociales ya existentes en estas zonas, donde tienden a fragmentar y erosionar los tejidos sociales de las comunidades locales. A estos procesos, geógrafos como David Harvey los denominan “acumulación por desposesión” (Harvey, 2005).

De esta manera, se rediseña y subordina el territorio latinoamericano a los intereses y necesidades de las corporaciones transnacionales interesadas en la expansión de la extracción de nuestros bienes naturales estratégicos, generando así nuevas “zonas de sacrificio” donde los daños ambientales, sociales y económicos son enfrentados y asumidos generalmente por

las propias comunidades afectadas y el Estado (Svampa y Martonelli, 2009; Alcayaga, 2009; Delgado, 2010).

En este contexto, la región binacional de los Andes patagónicos adquiere gran importancia en las geopolíticas extractivistas contemporáneas, ya que constituye una zona que posee amplias reservas de bienes comunes naturales que hoy en día son estratégicos para la reproducción de los patrones de acumulación a nivel global, como es el agua dulce, la biodiversidad y minerales metalíferos. Durante los últimos quince años, esta región ha sido el foco de numerosos megaproyectos de minería y represas hidroeléctricas en ambos lados de los Andes, frente a los cuales las comunidades han opuesto férrea resistencia y donde los casos del “No a la mina” de la argentina localidad de Esquel (Chubut) y la campaña “Patagonia sin represas” en la chilena Región de Aysén, son emblemáticos. Si bien ambos proyectos fueron derogados a raíz de las intensas movilizaciones sociales y por la incapacidad de las propias empresas de sustentar sus proyectos, constituyen una muestra del aumento de la conflictividad social ecoterritorial en toda América Latina. El Trabajo Social tiene un rol importante en estos nuevos escenarios de conflicto y debe profundizar la discusión ético-política, teórica, metodológica y práctica que promueva una acción social acorde con las nuevas complejidades y demandas sociales que surgen en estos nuevos escenarios ecoterritoriales en nuestros países.

UNA APROXIMACIÓN DESDE LA GEOGRAFÍA CRÍTICA Y LA ECOLOGÍA POLÍTICA A LOS CONFLICTOS ECOTERRITORIALES

La geografía crítica es un campo de estudio que plantea una explicación espacio-territorial de la configuración actual de las relaciones de poder y de las desigualdades sociales dentro de un sistema mundo/moderno-colonial (Mignolo, 2007) “que impacta a los territorios locales, permitiéndonos una explicación socialmente signifi-

cativa de la configuración espacial del mundo contemporáneo” (Ramírez, 2008). Desde esta perspectiva, el capitalismo y las acciones colectivas de la sociedad civil no solo se adaptan a los paisajes y espacios geográficos, sino que también producen espacios que establecen territorialidades, generándose lo que el geógrafo brasileño Milton Santos define como una dialéctica sociedad-espacio (Santos, 1994). La geografía crítica permite analizar desde categorías espaciales y territoriales los diversos conflictos sociales, la espacialización de las relaciones de poder, de los movimientos sociales y de las intervenciones transnacionales en los territorios locales.

Por otra parte, la ecología política es un campo de estudio y de acción crítico-dialógico que integra diversas disciplinas e interdisciplinas para comprender las raíces y la pluridimensionalidad de lo que entendemos como el conflicto ecoterritorial por el acceso, uso, propiedad y distribución de los bienes comunes naturales. Es un campo que se dedica a estudiar las articulaciones complejas y contradictorias entre las múltiples prácticas y representaciones de los diversos actores que se hacen presentes en la constitución de los territorios y la gestión de sus “recursos naturales” (Alimonda, 2011: 86), junto a los impactos, costos y beneficios de la intervención del ser humano en la naturaleza, los cuales se distribuyen de manera desigual en los territorios y comunidades locales y están profundamente determinados por sus dimensiones étnicas, raciales, de clase, de género. La ecología política busca así repolitizar este debate en término de las profundas relaciones y estructuras de poder que están implicadas en la cuestión ecosocial y en las desigualdades sociales. Desde esta perspectiva, podemos hacer un análisis holístico, complejo y enriquecedor de las implicancias que tienen las iniciativas extractivistas transnacionales en la naturaleza, en las comunidades locales, en las instituciones y en el quehacer del Trabajo Social en contextos de conflictos ecoterritoriales.

Cuando hablamos de conflicto ecoterritorial nos apoyamos en lo que denomina Svampa (2012) el “giro ecoterritorial de los movimientos sociales latinoamericanos”. La autora plantea que, a consecuencia de la inflexión extractivista en América Latina, proliferan explosivamente conflictos socioambientales en los cuales convergen las luchas ancestrales por la tierra de los movimientos indígenas y campesinos, con la participación ciudadana centrada en la defensa de los bienes comunes, la biodiversidad y el ambiente; la defensa de la tierra y el territorio adquieren así un lugar central (Svampa, 2012; Jiménez 2014). En nuestro caso planteamos como epicentro de estos conflictos la pugna de territorialidades que los genera (Jerez, 2013), donde se entretajan territorialidades sustentadas en racionalidades contradictorias que se disputan el diseño y control de una misma región en torno a determinadas relaciones sociedad-naturaleza. Así, proponemos a partir del concepto conflicto ecoterritorial poner énfasis en el territorio desde su dimensión sociocultural, política, económica y ecológica, y repolitizar este debate para develar las profundas desigualdades sociales y estructurales que determinan el curso de estos escenarios.

En este contexto, utilizamos la idea de territorialidades para dar cuenta de la apropiación y cimentación social establecida sobre los espacios geográficos, es la acción colectiva de marcar el territorio con nuestras visiones, cosmovisiones y prácticas que dan cuenta de nuestra relación con el entorno social y natural. Las territorialidades que vamos forjando en los espacios naturales están impregnadas de la historicidad que da cuenta de las diversas formas en que los humanos hemos tejido nuestra existencia social en los espacios naturales a lo largo de los años, donde el territorio y sus características se configuran como un testimonio de las distintas territorialidades que marca a las comunidades y sociedades que los han habitado, así como también de sus pugnas territorializadas,

como vemos en la actualidad con las intervenciones transnacionales en los espacios locales.

En este sentido, los conflictos que han existido en la Patagonia durante los últimos 15 años por la implementación de megaproyectos de minería y represas hidroeléctricas donde las comunidades regionales se levantaron a través de emblemáticos movimientos como el “No a la mina” en Esquel y “Patagonia sin represas” en la Región de Aysén, que constituyen una clara muestra de la lucha por la territorialidad en el extremo austral argentino-chileno, que pone de manifiesto las desigualdades sociales territorializadas que existen y accionan la defensa de los derechos humanos, sociales, económicos y ecoterritoriales de las comunidades locales.

CONFLICTOS ECOTERRITORIALES EN LOS ANDES PATÁGONICOS

Los Andes patagónicos constituyen un territorio que abarca todos los municipios cordilleranos de Argentina y Chile que se ubican en el extremo austral de ambos desde el paralelo 41°S (a la altura de la argentina ciudad de Bariloche) hasta el Estrecho de Magallanes. Es una zona que hoy tiene una importancia geoestratégica fundamental: una gran reserva de biodiversidad en excelentes condiciones y una de las mayores reservas de agua dulce superficial del mundo² (glaciares, ríos, lagos), sin contabilizar sus innumerables reservas acuíferas subterráneas, y por ser también un territorio que posee grandes yacimientos de oro, plata y otros metales preciados (que en gran parte del territorio están inexplorados)³. Esta región transfronteriza está habitada por pequeñas localidades donde conviven poblaciones mestizas, comunidades mapuche-tehuelche, descendientes de migrantes europeos y descendientes de colonos campesinos chilenos provenientes del resto de dicho país. Son localidades que presentan un alto grado de aislamiento geográfico, en las que predominan las

actividades agropecuarias en pequeña escala, el comercio local, con una fuerte dependencia económica de la precaria presencia de instituciones del Estado en el territorio, y de un incipiente turismo de intereses especiales que cada día adquiere mayor fuerza en las economías regionales de toda la Patagonia (Walter, 2008).

En la actualidad, a lo largo de toda la franja de los Andes patagónicos existen en carpeta numerosos megaproyectos de centrales hidroeléctricas que han detonado en los últimos quince años numerosos conflictos en las cuencas binacionales de los ríos Puelo, Manso, Pascua y Baker por el lado chileno, y en el río Encuentro en Argentina. En el caso de la megaminería, ha habido conflictos en torno a las exploraciones mineras en los ríos Espolón, Puelo y Futeleufú (Patagonia chilena), y en la Patagonia argentina son emblemáticas las grandes movilizaciones en contra de la explotación minera a cielo abierto en la localidad cordillerana de Esquel, y los conflictos por las explotaciones mineras existentes en el municipio de Perito Moreno, entre otros. Estos nuevos escenarios de conflicto revelan las distintas visiones del territorio, de la vida humana, de la naturaleza y de la interacción del ser humano que están en juego y se tensan en una pugna en torno al diseño territorial que se dibuja en un mismo espacio geográfico en disputa. En el caso concreto de las experiencias del “No a la mina” en Esquel y de “Patagonia sin represas” en la Región de Aysén, si bien estas movilizaciones lograron detener temporalmente en ambos casos los megaproyectos en cuestión, en los dos territorios continúan en carpeta planes para explotar sus bienes comunes naturales. Estos conflictos expresan claramente la extensa complejidad sociocultural, política, económica, territorial y ecológica que implica la instalación de megaproyectos extractivistas en las comunidades afectadas. La tranquila ciudad de Esquel se ubica en la argentina provincia de Chubut, en la cual durante los años 2001 y 2003 la minera canadiense Meridian

Gold pretendió instalar una explotación minera a cielo abierto denominado “El Desquite” para extraer oro bajo lixiviación con cianuro a tan solo siete kilómetros del casco urbano de dicho poblado. Esta situación provocó un movimiento social inédito de resistencia liderado por la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Esquel. Después de una amplia y transversal lucha de sus pobladores y de toda la comarca andina patagónica, el conflicto terminó definiéndose en un plebiscito en el que la población esquelense rechazó con más de un 81% de los votos a la minera (Walter, 2008, Weinstock, 2006), razón por la cual la empresa retiró este emprendimiento en el año 2003: *Nosotros empezamos por una cuestión de unidad, por una cuestión de dignidad, por una cuestión de sentimiento, por una cuestión espontánea o instintiva que fue muy intuitiva, pero no sabíamos adónde íbamos a llegar; y fijate que se transformó en un movimiento que anda por todos lados, que pasa todas las fronteras (Abogado, Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Esquel).*

Los impactos que hubiera generado en el territorio la implementación de este proyecto minero sin duda habrían sido múltiples. En primer lugar, la contaminación de los suelos, aire y agua provocada por los miles de litros de agua con cianuro, metales pesados y otras sustancias químicas altamente tóxicas para la salud humana (Renaud, 2008), que diariamente producen polvo en expansión por el removimiento de más de tres mil toneladas de roca⁴ que se habrían esparcido por las napas subterráneas que abastecen de agua a Esquel, dejando grandes tajos en las montañas esquelenses. Además de afectar gravemente la flora, suelos y fauna de los ecosistemas nativos y disminuir la disponibilidad de agua para la población local.

Las empresas buscan también controlar los espacios de toma de decisiones en las instituciones y en las comunidades locales, y se esconde información real de las implicancias que tienen estas iniciativas en los territorios, vulne-

rando el derecho de las comunidades a decidir informadamente; por lo mismo, muchas veces las mineras optan por comprar el silencio y la aprobación de los habitantes locales, aniquilando la libertad de expresión de estos (Renaud, 2008).

Esquel es sin duda una experiencia emblemática que inspiró a otras localidades de la Patagonia y del resto de Argentina para emprender sus luchas contra el extractivismo en sus territorios, ya que esa experiencia dio origen a una nueva etapa del movimiento social “ecoterritorial” (Walter, 2008), y abrir el debate en relación con la expansión de esta actividad económica en un país que no tiene tradición minera y en torno al hecho de que esa actividad responde sobre todo a los intereses transnacionales corporativos y a los autoritarismos de los gobiernos centrales, que sacrifican a las provincias para satisfacer los intereses extractivistas de las nuevas territorialidades hegemónicas, externalizando sus costos sociales y ecoterritoriales.

En el caso de la Región de Aysén, en el año 2005 aparece el megaproyecto hidroeléctrico Hidroaysén, una iniciativa liderada por la ex estatal Endesa, actualmente en manos de capitalistas italianos-españoles y del grupo chileno Colbún, controlado por la familia Matte⁵, que proyectaba inundar 5.910 hectáreas en los municipios fronterizos de Cochrane y O’Higgins para generar 2.750mw⁶. Este megaproyecto requería de la construcción de una línea de transmisión energética desde Aysén hasta la ciudad de Santiago de más de 2.270 kilómetros de torres y cables que afectarían a 66 municipios, 9 regiones, 10 áreas silvestres protegidas por el Estado, 3 zonas de interés turístico nacional y 26 humedales, para inyectar energía al Sistema Interconectado Central (Consejo de Defensa de la Patagonia, 2008).

Esta experiencia sin duda es una de las más emblemáticas de toda la historia ambiental de la Patagonia, debido a que la gran envergadura del proyecto y de los impactos en los territorios lo-

cales provocó una enérgica respuesta ciudadana tanto en la Patagonia como en el resto del país. Esta experiencia mostró que las grandes falencias de los sistemas de evaluación ambiental, de las políticas energéticas y de los planes de ordenamiento territorial, propias de estos megaproyectos extractivistas, subordinados a los vaivenes de los intereses de los inversionistas transnacionales de turno⁷, exponen a las comunidades locales a la contaminación y afectan sus actividades económicas locales, convertidas en “zonas de sacrificio”.

Entre los impactos más destacados de este megaproyecto hidroeléctrico destacamos la pérdida de biodiversidad endémica y nativa; impactos en humedales, glaciares y estuario, y degradación de cuencas. Desde un punto de vista social, señalamos la desintegración de las comunidades afectadas, el impacto negativo en los modos de vida de las comunidades, el crecimiento poblacional exuberante (más de cinco mil trabajadores flotantes para la construcción de las represas), la saturación de los servicios públicos (salud, educación, vivienda), junto a la proliferación de problemáticas sociales como las adicciones, la prostitución, la violencia y la pobreza (Consejo de Defensa de la Patagonia, 2008). Desde un punto de vista económico, hay una apropiación del agua y del patrimonio ambiental, pérdida de ingresos y empleos en el creciente sector turístico, además de la afectación de actividades económicas sustentables (denominación de origen, producción orgánica), el aumento del desempleo y baja de ingresos al término de las obras (Consejo de Defensa de la Patagonia, 2008). Las movilizaciones sociales fueron lideradas por el Consejo de Defensa de la Patagonia, una coalición conformada por una diversidad de organizaciones e instituciones locales, nacionales e internacionales en defensa del medio ambiente, de las culturas, economías regionales y territorialidades locales de la Patagonia, a través de un trabajo organizativo dentro y fuera de la Región:

La misma gente los corre, jeje, ese es

como el nivel de tensión que genera Hidroaysén, entonces ante eso han aportado bastante igual la formación de las organizaciones en cada pueblo, que trabajan más puntualmente los casos de esos pueblos; y aparte hay otro trabajo que es pa' afuera de la región (Joven activista Agrupación Nacional de Jóvenes Tehuelche).

Fue durante el gobierno de Sebastián Piñera en el año 2011 cuando Hidroaysén alcanzó los mayores porcentajes de rechazo nacional, superando el 60% de la población; sin embargo, y pese a ello, en esa misma época el Gobierno dio luz verde al proyecto, hecho que despertó un inédito y profundo descontento nacional, sin precedentes, que canalizó las viejas rabias y frustraciones de tanta gente que se sintió pasada a llevar por este y otros proyectos en su zona (Liberona, 2011); que se tradujeron en multitudinarias marchas en Santiago y en otras importantes ciudades chilenas⁸, las que además se vieron potenciadas por los levantamientos populares en Aysén por el alza de los precios de la gasolina, el abandono del Estado a la región, y también por el emblemático movimiento estudiantil que en ese mismo año se levantó en todo el país. Como consecuencia de este gran movimiento, en junio de 2014 el comité de ministros de Estado del Gobierno actual de Bachelet rechazó en forma unánime este megaproyecto hidroeléctrico por incumplimiento pleno a la ley ambiental, invalidando la aprobación que recibió en la administración anterior en el año 2011, constituyendo uno de los más grandes triunfos en las luchas ecoterritoriales en el país.

NUEVOS ESCENARIOS Y DESAFÍOS PARA EL TRABAJO SOCIAL

En este escenario, emergen nuevos campos y desafíos de acción social en estas regiones estratégicas que son hegemonícamente reterritorializadas como nuevas “zonas de sacrificio”. El Trabajo Social también constituye un

importante actor para la implementación de megaproyectos extractivistas en los territorios locales, ya que en nuestra acción profesional asumimos junto con las comunidades afectadas los impactos negativos de carácter económico, político, sociocultural y ambiental que producen los diversos megaemprendimientos en cuestión para controlar los territorios locales, los tejidos sociales y sus bienes comunes naturales.

Ahora bien, desde la experiencia específica de los conflictos ecoterritoriales en los Andes patagónicos, planteamos la necesidad de hacer más visible y sistematizar la manera en que los trabajadores sociales enfrentan estos escenarios en las instituciones sociales, empresas y en las comunidades locales. Teniendo presente que somos una disciplina que se ubica en un espacio estratégico de interacción entre esta diversidad de actores, donde también se manifiestan muchos de estos conflictos; por ejemplo, en la implementación de programas sociales y la vinculación de confianza entre las familias y las comunidades con los trabajadores sociales. Muchas veces dichos espacios son intervenidos de diversas formas por las empresas para obtener la licencia social de sus habitantes, como sucedió con mayor claridad en el caso de Hidroaysén, donde la empresa asediaba permanentemente a los profesionales del área social de los municipios intervenidos para ganar su confianza y poder involucrarse en el trabajo comunitario que realizaban con la comunidad local, además de la entrega de numerosos apoyos sociales (becas, premios para bingos, financiamiento de fiestas populares, apoyo a microemprendimientos, etc.) y de esta forma, obtener la aprobación social pese a los impactos negativos de las represas en el territorio y en la vida cotidiana de sus habitantes.

Así, en el quehacer profesional nos enfrentamos a comunidades que se dividen en esta lucha por la territorialidad de los espacios de vida, donde en los servicios e instituciones públicas

y privadas los trabajadores sociales entran en conflictos éticos cuando sus opiniones son contrarias a los megaproyectos de turno, corriendo el riesgo de perder sus empleos como documentamos en ambas experiencias expuestas. Además, los trabajadores sociales nos enfrentamos a numerosos dilemas ético-profesionales que se sustentan en la dialéctica de la contención social versus la promoción de derechos, de un empoderamiento y reivindicación social que refuerce los derechos sociales y económicos vulnerados producto de esta intervención socioterritorial transnacional.

En estos conflictos existen actores que logran mantenerse en resistencia estableciendo procesos sociales locales que van paulatinamente ganando espacios y mayores adherentes a nivel regional, nacional e internacional. Así surgen iniciativas como “Patagonia sin represas”, “Aysén”, “Reserva de Vida”, “No a la mina”, “Aysén decide”, entre otras organizaciones sociales locales y externas que van fortaleciendo en la Patagonia sus territorialidades locales retroalimentadas por otras luchas sociales que se orientan al derecho de los patagones a decidir sobre el futuro de su territorio por sobre los intereses externos. Así, esta pugna de territorialidades que se expresa en estos conflictos también ha traído una revalorización del territorio tanto a nivel global como desde sus propios habitantes.

Los trabajadores sociales tenemos también un campo de acción profesional que se va entretejiendo de la mano con las organizaciones y actores locales que levantan sus territorialidades como el eje central de su reivindicación social. Nuestra disciplina encuentra nuevos espacios de acción a través del fortalecimiento de organizaciones ciudadanas, gestando espacios sociales para el debate, difusión de información en las comunidades (que suelen estar forzosamente desinformadas), y desde la administración pública, potenciando espacios para la planificación regional del

territorio basada en las necesidades locales y desde racionalidades territoriales ecopolíticas.

APROXIMÁNDONOS A UNA RACIONALIDAD TERRITORIAL ECOPOLÍTICA PARA LA ACCIÓN PROFESIONAL DEL TRABAJO SOCIAL

Frente al aumento de los conflictos ecoterritoriales en toda América Latina, es necesario profundizar las reflexiones y perspectivas profesionales que nos permitan enfrentar estos contextos de una manera más integral, estratégica y situada, identificando la diversidad de factores que intervienen en estas realidades. El Trabajo Social pueda velar por la defensa de los derechos humanos, la justicia social y ambiental, el respeto por la autodeterminación tanto de las personas como de las comunidades, y trabajar por la sustentabilidad ambiental (FITS, 2004; Colegio de Asistentes Sociales de Chile, 2014) y social.

En estos escenarios el Trabajo Social es un actor clave en la intervención social de lo que Ciorino define como la cuestión ecosocial (2013). Para ello es importante impulsar una discusión disciplinar y el ejercicio profesional hacia perspectivas epistemológicas y metodológicas que permitan superar la racionalidad instrumental económica que subyace a los megaproyectos extractivistas y de los Gobiernos nacionales, procurando situar la discusión desde una racionalidad “otra” que nos permita comprender la complejidad e integralidad de los escenarios de acción profesional en las comunidades intervenidas por megaproyectos. Identificando, así, posibilidades para la intervención social que efectivamente se orienten a la protección de los derechos sociales y ecoterritoriales de las comunidades afectadas.

Proponemos ubicarnos profesionalmente en escenarios de conflictos ecoterritoriales desde lo que definimos como una “racionalidad territorial ecopolítica” para orientar el acercamiento de la realidad en un ejercicio

diagnóstico permanente y en diálogo con el resto de las fases de la intervención social, que tenga como punto de partida el rescate de la historia social y ambiental⁹ de los territorios para comprender la trayectoria sociohistórica y las memorias colectivas de la relación sociedad-naturaleza de estos, y por lo tanto, de los conflictos previos que hayan existido allí. Además, en esta racionalidad buscamos la incorporación, valoración y el diálogo participativo-horizontal entre las diversas culturas y territorialidades existentes en las zonas en cuestión, integrando las perspectivas ciudadanas-ecológicas con las matrices indígenas-comunitarias-ancestrales para la acción profesional; procurando develar e incorporar las demandas y utopías de los actores territoriales respecto al futuro de los territorios, comprendiendo a la naturaleza y a los seres humanos como sujetos de derechos de diversa índole. Buscamos también dar cuenta de las diversas redes sociales, actores y territorialidades comunitarias existentes y en su relación con los bienes comunes naturales en el territorio como punto de partida, donde se identifiquen espacios y oportunidades para una gestión situada, territorial y participativa de los bienes comunes naturales, otorgando suma importancia a los impactos de las actividades económicas en el mediano y largo plazo.

Situar al Trabajo Social desde una racionalidad territorial ecopolítica implica la toma de decisiones, la planificación sectorial y territorial, partiendo de un diálogo interdisciplinario de saberes científicos, ancestrales y sociopopulares existentes en estas regiones, donde tengan una importante incidencia las democracias territoriales (entendidas como espacios de toma de decisiones resolutivas a nivel local de todos los actores de un territorio), y la democratización de las economías territoriales (entendida como el derecho a la existencia simultánea de la diversidad de actividades económicas en distintas escalas de un territorio, y de no ser despojadas por economías monoprodu-

ductoras extractivistas). Buscando aquí más que el vivir mejor o el desarrollo, un buen vivir local.

CONCLUSIONES

Los conflictos ecoterritoriales en los Andes patagónicos son una muestra de los nuevos escenarios que enfrentan cada día con mayor intensidad numerosas comunidades locales en toda América Latina, afectadas e intervenidas por los nuevos extractivismos de enclave, en las que se generan complejas e inéditas realidades que desafían al Trabajo Social. Los procesos de cambio social inciden en nuestro campo disciplinar porque estamos insertos en el juego de las relaciones sociales que nos impulsan a responder a nuevas, viejas e innovadas problemáticas (Barone, Draganchuck y Dachary; 2012). Estos conflictos involucran a diversos actores en los territorios locales donde se reproducen y expanden las desigualdades sociales y las relaciones de poder ya preexistentes, por lo que es importante expandir y profundizar los espacios de reflexión desde el Trabajo Social para analizar, investigar y establecer líneas de acción que nos permitan enfrentar estos nuevos contextos desde perspectivas interdisciplinarias críticas y transformadoras.

Las emblemáticas experiencias del “No a la mina” de Esquel y de “Patagonia sin represas” en Aysén muestran la necesidad de profundizar la discusión en torno al ejercicio del Trabajo Social en contextos extractivistas, donde es fundamental una reflexión disciplinar que permita desnaturalizar las relaciones sociedad-naturaleza hegemónicas, que al desterritorializar las comunidades locales profundiza las desigualdades sociales ya preexistentes, generando una mayor devastación de la naturaleza y de los tejidos sociales locales. Ante lo cual la ciudadanía cada vez demanda con mayor fuerza la defensa de sus territorialidades, mayor justicia ambiental y un proceso de democracia territorial efectiva y resolutiva.



En ese sentido, proponemos un acercamiento del Trabajo Social a estas realidades desde una racionalidad territorial ecopolítica que se complementa con los aportes de la ecología política y la geografía crítica, para fortalecer un enfoque territorial que de cuenta de las complejidades que implica el desempeño profesional en las nuevas “zonas de sacrificio”, incorporando en la formación académica como uno de sus ejes transversales, la importancia de la relación sociedad-naturaleza, el territorio y la sustentabilidad como escenarios de justicia social y desigualdad social. Hoy es necesario integrar perspectivas y estrategias que permitan considerar con mayor importancia los puntos de vista de las personas y comunidades afectadas, garantizar el derecho a la información clara e inteligible a estas, el derecho a decidir soberanamente sobre el rumbo de sus territorios, donde el Trabajo Social basándose en el bien común, la justicia ambiental y la defensa de los derechos humanos sea un facilitador y garante de estos procesos de democracia territorial a través de su acción profesional. •

1. Walter Mignolo (Mignolo, 2007), propone la idea de “sistema-mundo moderno/colonial a partir de la teoría del sistema-mundo de Immanuel Wallerstein, donde plantea que la modernidad tiene un profundo lado oscuro llamado “colonialidad”, develando con este concepto un proceso sociohistórico de dominación oculto que abre las puertas para comprender los conocimientos, historias, sujetos y geografías subordinadas e invisibilizadas por la modernidad eurocéntrica, donde el colonialismo y la colonialidad convirtió en marginalidad las epistemes otras, y en nuestro caso a nuestros países y las diversas territorialidades que existen en ellos, como parte de lo que definimos como una territorialidad hegemónica extractivista.

2. La Patagonia, de acuerdo con los antecedentes entregados por el glaciólogo Andrés Rivera del Centro de Estudios Científicos (CECS) en Chile, constituye la tercera reserva de agua dulce superficial más grande del mundo –después de Groenlandia y la Antártida– donde existen más de 22 mil kilómetros cuadrados de hielo, sin tomar en cuenta los ríos, lagos y aguas subterráneas que existen en el territorio. En: <http://www.futurorenovable.cl/2011/12/glaciares-tercera->

[mayor-reserva-de-agua-dulce-se-ve-amenazada-por-retroceso-de-hielos-patagonicos/](http://www.futurorenovable.cl/2011/12/glaciares-tercera-mayor-reserva-de-agua-dulce-se-ve-amenazada-por-retroceso-de-hielos-patagonicos/) Revisado el 15 de noviembre de 2014.

3. En la Patagonia argentina y chilena existen grandes reservas de minerales preciados en los mercados internacionales, como oro, plata, hierro entre otros; situación que aunada a grandes oportunidades de rentabilidad por los altos precios de estos elementos en los mercados internacionales, y por las grandes facilidades arancelarias que otorgan ambos países para el desarrollo de la gran minería, han generado una ola de exploraciones mineras para instalar en el corto y mediano plazo grandes explotaciones mineras lideradas por corporaciones transnacionales. Algunos antecedentes de este tema en: <http://www.lasegunda.com/Noticias/Economia/2013/06/856053/fiebre-del-oro-en-aysen-mineras-ya-controlan-635-mil-hectareas> Revisado el 10 de noviembre de 2014.

4. De acuerdo con antecedentes entregado por el periódico argentino *La Nación* <http://www.lanacion.com.ar/468316-polemico-proyecto-aurifero-en-esquel> Revisado el 11 de noviembre de 2014.

5. La familia Matte es una de las familias más ricas de Chile, la cual controla una serie de empresas en el rubro forestal (CMPC), hidroeléctrico (Colbún), el banco BICE y numerosas empresas en los rubros financiero, minero, educacional, telecomunicaciones, en otros.

6. Información expuesta por la empresa en: <http://www.hidroaysen.cl/> Revisado el 14 de noviembre de 2014.

7. Este conflicto muestra la improvisación de los gobiernos en relación a la demanda y oferta de energía eléctrica donde imperan criterios de mercados y las coyunturas, debido a la ausencia de una política energética estratégica que planifique territorialmente la disponibilidad, el tipo de oferta y el gasto límite de energía que puede absorber el país. Además los sistemas de Evaluación Ambiental (SEIA) no son capaces de prevenir efectivamente los impactos negativos de los proyectos, ni de los conflictos ecoterritoriales, los que suelen terminar resolviéndose en tribunales y no en las instancias correspondientes como los SEIA. Y finalmente, las planificaciones regionales vigentes como la Estrategia de Desarrollo Regional de Aysén y el Plan Regional de Ordenamiento Territorial de la misma proyectan una región sustentada en actividades agropecuarias, turísticas y comerciales que sean compatibles con la protección ambiental y las identidades culturales de la región como patrimonios a preservar, lo que claramente se contradice con la instalación de represas hidroeléctricas en la región. Al respecto, sírvase revisar: http://www.goreaysen.cl/controls/neochannels/neo_ch95/appinstances/media204/PROT.pdf y <http://www.subdere.gov.cl/sites/default/files/docu->

[mentos/articulos-82944_archivo_fuente.pdf](http://www.subdere.gov.cl/sites/default/files/docu-mentos/articulos-82944_archivo_fuente.pdf) Recuperado el 10 de marzo de 2015.

8. Durante el primer semestre del año 2011 hubo multitudinarias marchas en Santiago y también en otras ciudades chilenas como Curicó, Valparaíso, Osorno, Temuco, Castro, Puerto Montt, Concepción, Coyhaique y en todas las regiones del país como respuesta a la aprobación del proyecto que dio el gobierno de Piñera en ese entonces. Como una muestra de estos sucesos, sírvase revisar: <http://www.elmostrador.cl/pais/2011/05/15/gobierno-preocupado-por-masiva-movilizacion-ciudadana/> Recuperado el 10 de marzo de 2015.

9. La historia ambiental es un campo de la historia que se dedica a estudiar la historia del medio ambiente en su calidad de condicionante de la vida humana, y como condicionado por la acción de las sociedades en él, donde se entiende a la naturaleza como agente histórico de cambio, como un actor dinámico que construye relaciones e influencia mutua con las comunidades y sociedades que lo habitan. Abarca la historia de los impactos de las diversas actividades económicas, las huellas ecológicas y las modificaciones de los espacios naturales, donde se incluye la trayectoria de los territorios en los conflictos ecoterritoriales.

10. Académico Arturo Vallejos de la Universidad de los lagos expone en una charla acerca de algunos enfoques de intervención en conflictos ambientales, organizada por la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Atacama. En: http://www.uda.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=431:docente-de-u-de-los-lagos-abordo-enfoques-de-intervencion-en-conflictos-socioambientales&catid=15&Itemid=277 Revisado el 15 de noviembre de 2014.

Referencias bibliográficas

- Alimonda, H. (2011). "La colonialidad de la naturaleza. Una aproximación a la ecología política latinoamericana". En: *La naturaleza colonizada. Ecología política y minería en América Latina*. Clacso, Buenos Aires.
- Barone, M. Draganchuck, C. Dachary, D. (2012). "Hablamos de...? Disputas, conflictos ambientales o soberanía ambiental. Escenario de megarepresas en Misiones, Argentina". Ponencia en XX Seminario Latinoamericano de Escuelas de Trabajo Social Alaets. Córdoba, Argentina.
- Ciorino, R. (2013). "La cuestión eco-social: notas para un debate contemporáneo en ciencias sociales". *Revista de Trabajo Social Perspectivas* 2013 (24).
- Colegio de Asistentes Sociales de Chile A.G. (2014). Código de ética para los trabajadores sociales de Chile. http://www6.uc.cl/trabajosocial/site/artic/20140606/asocfile/20140606155655/codigo_etica_version_final.pdf (Recuperado el 19 de septiembre de 2014).
- Delgado, G. (2010). *Ecología Política de la Minería en América Latina*. Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. México, DF.
- FITS (2004). "Ética en el Trabajo Social. Declaración de Principios. Asamblea general de la Federación Internacional de Trabajadores Sociales (FITS) Adelaida". http://www.trabajosocialcordoba.com/documents/Codigo_Etica_FITS (Recuperado el 19 de septiembre de 2014).
- Harvey, D. (2005). "El "nuevo" imperialismo. Acumulación por desposesión. Clacso". <http://biblioteca.clacso.edu.ar/gsd/collect/clacso/index/assoc/D8555.dir/harvey.pdf> (Recuperado el 1 de agosto de 2014).
- Jerez, B. (2013). "Impacto de las geopolíticas transnacionales en las localidades transfronterizas de la Patagonia Andina: Territorialidades en conflicto en torno a la implementación de megaproyectos de minería y represas hidroeléctricas". *Revista de estudios políticos y estratégicos*, 2013 (1).
- Jiménez, E. (2014). *Dilemas ecoterritoriales de la integración regional: IIRSA en las sociedades de Bolivia y Chile*. Clacso, ASDI.
- Liberona, F (2011). "Descontento ciudadano frente a política ambiental: el estallido de Hidroaysen". *Revista Medio Ambiente* 2011 (9). Fundación Equitas. <http://www.fundacionequitas.org/descargas/barometro/barometro03-09.pdf> (Recuperado el 10 de noviembre de 2014).
- Mignolo, W. (2007). *La idea de América Latina*. Gedisa editorial. Barcelona.
- Ramírez, H. (2008). "Desarrollo, subdesarrollo y teorías del desarrollo en la perspectiva de la geografía crítica". *Revista Escuela de Historia* n. 7 vol. 1 Nro. 7 Facultad de Humanidades Universidad Nacional de Salta. <http://www.unsa.edu.ar/histocat/revista/revista0709.htm> (Recuperado el 16 de septiembre de 2014).
- Renaud, J. (2008). "Impacto de la gran minería sobre las poblaciones locales en Argentina". http://www.conaduh.org.ar/IMG/pdf/Informe_Impacto_de_las_actividades_mineras.pdf (Revisado el 15 de noviembre de 2014).
- Santos, M. (1994). *Metamorfoses do espaço habitado*. Hucitec, Sao Paulo.
- Svampa, M. y Antonelli, M. (2009). *Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias*. Ed. Biblos, Buenos Aires.
- Svampa, M. (2012a). Hacia una gramática de las luchas en América Latina: Dimensiones de la acción y giro eco-territorial. *Revista Nostromo* año IV, 2012 (5).
- Svampa, M. (2012b). "El consenso de los commodities, giro ecoterritorial y pensamiento crítico en América Latina". *Revista del Observatorio Social de América Latina* (OSAL), año XIII, 2012(32).
- Walter, M (2008). "Nuevos conflictos ambientales en Argentina. El caso Esquel 2002-2003". *Revista iberoamericana de economía ecológica* 2008 (8).